

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia  
JUZGADO : 25° Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-15225-2022  
CARATULADO : RODRÍGUEZ/COSEJO DE DEFENSA

Santiago, veintitrés de Diciembre de dos mil veintitrés

### **VISTOS:**

En folio 1 compareció don ADIL BRKOVIC ALMONTE, abogado, domiciliado, para estos efectos, en calle San Pio X 2460 oficina 702, comuna de Providencia, Región Metropolitana, en representación judicial de doña ALBINA PRUDENCIA RODRIGUEZ AVERANGA, jubilada, domiciliado en Los Artesanos N° 916, comuna de Arica; quien, en la representación investida, interpuso, en juicio de hacienda, una acción de indemnización de perjuicios en contra del FISCO DE CHILE, persona jurídica de Derecho Público, representado judicialmente, en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado, por don JUAN ANTONIO PERIBONIO PODUJE, abogado, ambos domiciliados en Agustinas N°1225, piso 4, comuna de Santiago; en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que se reproducen a continuación:

### **ANTECEDENTES DE HECHO:**

Alegó que la demandante es cónyuge de don ISIDORO CASTRO VILLANUEVA, quien en 1977 se desempeñaba como garzón en el Casino de Suboficiales del Ejército, en Arica, habiendo desaparecido el 1° de junio de 1977, desde dicha dependencia militar, a las 00:30 horas de ese día. Desde esa fecha la familia no ha vuelto a ver a Isidoro Castro. El 31 de mayo de 1977, el cónyuge de su



Foja: 1

representada, se dirigió a su trabajo como era su costumbre habitual y le informó telefónicamente a su mujer que esa noche regresaría un poco más tarde. Sin embargo, no regresó a su hogar, y su cónyuge, doña Albina Rodríguez, tuvo que esperar hasta el día siguiente, dado que había toque de queda, debiendo postergar estas gestiones hasta el día siguiente. A primera hora de la mañana del 1° de junio de 1976, concurrió hasta el casino de Sub Oficiales para consultar por su marido a su trabajo, allí recibió informaciones contradictorias de varios militares. El teniente de guardia le indicó que Castro se había retirado a las 21:30 horas, otro guardia le contó que se había ido a las 24:00 horas y otro le indicó que salió a las 02:00 horas. En la cocina, todo el personal se negó a darle información y una de estas personas le confidenció que habían recibido órdenes de no hablar sobre ese asunto. Revisó su casillero y encontró que estaba vacío, pero que extrañamente la bicicleta de su marido, en la que se había movilizó al trabajo, permanecía en el local. Un agente de la Central Nacional de Informaciones (DINA-CNI), que estaba en el lugar, la amenazó de que lo pasaría muy mal si seguía reclamando por su marido y le ordenó irse. Según declaración a la Policía de Investigaciones de Claudio del Villar Monte, concesionario del casino, el afectado, trabajaba allí como garzón desde marzo de ese año y había sido contratado en mayo, informó que el 31 de mayo, Isidoro Castro había llegado a su trabajo a las 11:00 horas de la mañana y había permanecido hasta las 00:30 horas, oportunidad en que se retiró, desde entonces no lo vio más. La demandante acudió a varios abogados, los cuales o derechamente se negaron a prestarle ayuda o en otros casos le dijeron que reunirían información antes de hacer cualquier gestión. Uno de ellos, le informó que Castro estaba en "algo así como espionaje y que él llegaba hasta allí no más". Otro abogado le informó, que su cónyuge estaba vivo y que estaba, efectivamente, detenido por los militares y que se debía a que la noche del desaparecimiento había habido una comida de generales y que a Castro le había tocado la mala suerte de estar allí.



Foja: 1

Su representada en su desesperación transmitió este caso a la prensa y apareció la noticia en primera página del diario local "La Estrella de Arica", el 18 de agosto de 1977 y en el vespertino "La Defensa". Esta divulgación del hecho, que fue presentado como un caso meramente policial, generó que esta fuera de severas amenazas por parte de los militares. A la fecha de los hechos del desaparecimiento doña Albina Rodríguez Averanga, estaba esperando familia y tenía la nacionalidad boliviana, por lo que se especula que uno de los motivos, dentro del contexto de conflicto que existía en ese año con los países limítrofes, sumado a la paranoia de los agentes de inteligencia, podría haber sido su nacionalidad, ya que posteriormente fue sometida a vigilancia, su correspondencia fue intervenida y recibió llamadas telefónicas anónimas. Además, después de la desaparición de su marido fue expulsada de la vivienda CORVI que estaban pagando y sólo largo tiempo más tarde le asignaron otra vivienda similar. Sus gestiones para nacionalizarse chilena quedaron paralizadas durante largo tiempo. La cónyuge recibió consejos de abogados en el sentido de que era conveniente no hacer gestiones porque puede ser perjudicial para el detenido desaparecido y para ella misma, sin embargo y a pesar de no haber podido obtener asistencia letrada presentó por vía postal, el 6 de enero de 1978, un recurso de amparo en favor de su marido ante la Corte de Apelaciones de Iquique. Nunca tuvo respuesta ni información respecto de la tramitación de este recurso. El 3 de junio de 1977, la presentó denuncia por presunta desgracia ante Carabineros, la que fue remitida al Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Arica., iniciándose el 4 de junio de 1977, un proceso por la "presunta desgracia de Isidoro Castro Villanueva", que fue ingresada bajo el Rol 28.728-1977, en el mencionado juzgado. El Juzgado envió requisitorias a todos los juzgados del país y se dio orden de investigación. La Policía de Investigaciones de Arica informó en el Parte 800 al Juzgado que había hecho averiguaciones en las cárceles, morgue local, hospitales y Comisarías de Carabineros sin obtener datos sobre el paradero de Isidoro Castro. Los partes de la Policía de



Foja: 1

Investigaciones de otros lugares tampoco proporcionaron mayor información útil para el caso. Las declaraciones del concesionario y del barman del Casino donde trabajaba Castro, no brindaron nueva información, excepto que el segundo recordaba que la bicicleta de Castro permaneció en el local de Casino. También se recibieron informes que confirmaban que Castro no había salido de Chile y que tampoco figuraba como viajado al sur del país. El 13 de enero de 1978 se declaró cerrado el sumario y se sobreseyó temporalmente con consulta a la Corte de Apelaciones de Iquique, la cual aprobó el sobreseimiento el 14 de febrero de 1978. Su representada, además de las gestiones mencionadas, acudió al Obispado de Arica, hizo presentaciones al Intendente de la Primera Región, al Presidente de la República de aquella época, al Ejército, etc. También hizo consultas en la Fiscalía Militar local. El jefe del regimiento local, comandante Núñez, recibió a la Sra. Rodríguez y le prometió hacer averiguaciones, pero nunca entregó ninguna información. Todas estas gestiones fueron infructuosas. Isidoro Segundo Castro Villanueva continúa desaparecido hasta la fecha de la presente demanda; refirió.

Expuso que el secuestro del cónyuge de su representada se enmarca en el accionar de una unidad de seguridad, de entre las tantas que operaban en la ciudad de Arica en esa época, específicamente la Brigada Millaray de la Dina que luego pasa a llamarse Centra Nacional de Informaciones, la que se encontraba a cargo del oficial de ejército, Raúl del Canto Galdames. Es así, como entre los meses de abril y julio de 1977, fueron detenidas otras cuatro personas en Arica, las que también se encuentran desaparecidas. Se trata de don José Sergio Núñez Guerra, Sergio Oviedo Sarria (peruano) Pedro Segundo Mella y Juan José Paillalef Paillalef (peruano) Según se desprende de la investigación criminal, la cual se desarrolla hasta el día de hoy, todos ellos habrían sido “espías”, al servicio del Perú o Bolivia.



Foja: 1

Indicó que, hasta la fecha se mantiene abierta una investigación por secuestro agravado de estas cinco personas, la que es instruida por el Ministro en Vista de la Corte de Apelaciones de la Serena, don Vicente Hormazábal Abarzúa, bajo el Rol 1322 Tomo B, en la cual, con fecha reciente, se dictó sentencia definitiva, en contra del jefe de la Brigada Millaray de la DINA -CNI, don Raúl del Canto Galdámez, condenándosele a la pena de 10 años y un día como autor del secuestro de don Pedro Mella, la que fue confirmada con declaración por la Corte de Apelaciones de La Serena, la que subió la pena a 15 años de presidio mayor en su grado medio.

Refirió que el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación Volumen II pg. 71 y 72, declaró que había adquirido convicción de que ISIDORO SEGUNDO CASTRO VILLANUEVA, había sido víctima de violación grave a sus derechos fundamentales, afirmado que “Isidoro Castro, de 25 años de edad, casado. Trabajaba como garzón del Casino de Sub Oficiales de Ejército en Arica. No tenía militancia política conocida. El día 31 de mayo de 1977 fue detenido en su lugar de trabajo, por agentes de seguridad, al parecer del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) de Arica, ignorando su familia su paradero desde esa fecha. Sus aprehensores son responsables de su desaparición forzosa”, según citó.

#### NATURALEZA DEL DAÑO DEMANDADO:

Al respecto alegó que se demanda el daño propio sufrido por la cónyuge de don Isidoro Castro Villanueva, como consecuencia de su secuestro acaecido el 31 de mayo y la madrugada del 1 de junio de 1977, en dependencias del Club de Sub Oficiales del Ejército de Chile, crimen atroz, calificado como de lesa humanidad, el cual sumió a su cónyuge en un dolor infinito, que no concluye, porque el destino de su ser querido no ha sido develado, su cuerpo no ha sido encontrado y los culpables no han sido condenados, daño que se ha extendido a todos los ámbitos de su vida, el que se vio además agravado por la



Foja: 1

pérdida del hijo de ambos que la demandante se encontraba embarazada, señaló.

Argumentó que el desaparecimiento de una persona constituye un duelo sin fin. Las consecuencias psicológicas en los familiares de las víctimas son devastadoras. Los estudios han demostrado que la detención seguida del desaparecimiento de un familiar es un trauma con consecuencias psicológicas y psiquiátricas severas, ya que representa una experiencia trágica e inédita que actúa sobre las diversas estructuras psíquicas de los individuos afectados provocándoles una constelación sintomática perturbadora e incapacitante, así como cambios profundos en la personalidad y en el curso de su vida. La vivencia ambivalente permanente que se mueve entre la posibilidad de la pérdida (muerte) y la esperanza de encontrarlo ha sido caracterizada por los expertos como una entidad distinguible de la pérdida misma del ser querido, constituyéndose en una tortura psicológica permanente que trasciende globalmente a la existencia del sujeto. Expresó que la pérdida por desaparición forzada es vivida como la experiencia de dolor más profunda que marca generalmente un antes y un después en la biografía del sujeto, provocando una respuesta paralizante que sumerge al individuo en un estado de shock e incertidumbre dado que no logra obtener una explicación que de sentido a una pérdida tan abrupta y brutal, desencadenando un estado de estupor de tiempo indeterminado que puede sumergir al familiar en un estado depresivo caracterizado por un desinterés vital en el mundo que lo rodea .

Expuso que a la fecha de presentación de esta demanda han transcurrido 45 años desde el secuestro de don Isidoro Castro Villanueva, cónyuge de su representada, quien han vivido esta pérdida no solo con intenso dolor desde el día mismo de su ocurrencia, sino que además en completa soledad, ya que nunca rehízo su vida sentimental, en desventaja social y económica por el desamparo en que quedó desde el mismo día en que desapareció su cónyuge.



Foja: 1

Refirió que, en síntesis el secuestro del cónyuge de la demandante seguida de la impunidad hasta la fecha de presentación de esta demanda, así como el desconocimiento respecto del destino de sus restos, ha significado para ella un profundo daño psicológico y una afectación negativa en todos los ámbitos de la vida, que han estado presentes durante los últimos 45 años.

Indicó que, como es de esperar, el daño sufrido por la demandante excede el propio de la pérdida de un ser querido ya que tiene la particularidad de provenir de una entidad jurídica que excede con creces en sus consecuencias a la privación de la vida del familiar querido. En efecto, las violaciones graves a los Derechos Humanos, como en el caso, comprenden un conjunto de conductas de parte de los agentes que indudablemente agravan el hecho mismo de la pérdida del familiar. La persecución a que es sometida la familia, no saber que ocurrió realmente con el ser querido si está vivo o no, la manipulación de la información por parte de la dictadura sobre su destino, el miedo permanente, la exclusión, el aislamiento social, las dificultades laborales, la inexistencia del cuerpo, la búsqueda interminable, la justicia esquivada. Todos estos factores producen un gran impacto en la psiquis de los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, llegando a afectar en forma severa su salud mental. La vivencia de la impunidad que aún perdura también afecta a los demandantes.

Alegó que los especialistas del área señalan que la impunidad se internaliza desencadenando procesos psicológicos que colaboran en la producción de formaciones psicopatológicas de los familiares y en las cuales predomina una actitud de desesperanza que impregna la existencia del sujeto y que se enmarca en un ánimo depresivo y una conducta deprimente hacia el mundo. La pérdida por desaparición y/o ejecución se transforma en el motivo desencadenante de cuadros psicológicos y psiquiátricos severos en los cuales los duelos tienden a encapsularse en vivencias subjetivas altamente patógenas.



Foja: 1

Estimó que los hechos relatados son constitutivos de daño moral. En efecto, según la jurisprudencia de nuestros tribunales, este es de identidad subjetiva y sicológica y se verifica cuando un hecho externo afecta la integridad física o moral de una persona con la cual se tienen lazos de parentesco que crean serios vínculos de afecto (Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo XLV, sección primera, p. 526). Agrega la jurisprudencia uniforme que "el daño moral es de índole netamente subjetiva y su fundamento se encuentra en la propia naturaleza de la psicología afectiva del ser humano, de manera que puede decirse que tal daño se produce siempre que un hecho afecta a la integridad física o moral de un individuo..." (Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo LVIII. Segunda Parte, sección cuarta, pág. 374). El daño sufrido por los demandantes tiene justamente la naturaleza descrita. Se trata de una aflicción, pesar, dolor, angustia que ha afectado y afecta sus sensibilidades, sentimientos y personalidades, produciendo un perjuicio grave en su esfera afectiva y psicológica como consecuencia de la detención seguida del desaparecimiento del ser querido.

Mencionó que, por último, respecto del monto de la indemnización, su representada estima, que el sufrimiento experimentado como consecuencia del asesinato de su cónyuge y sus consecuencias directas e indirectas en su vida, entre ellas la pérdida del hijo común que estaba por nacer, no es reparable con ninguna cantidad de dinero, ya que este no puede reemplazar de modo alguno, el cariño, protección y demás afectos de los cuáles fueron privados. No obstante, el Estado de Chile puede mitigar las carencias emocionales y demás daños y privaciones experimentadas, pagando a la demandante la suma de \$ 250.000.000.- (doscientos cincuenta millones) teniendo como referencia para fijar esta suma las indemnizaciones que regularmente se han establecido en fallos recientes de igual naturaleza dictados por la Excma. Corte Suprema, o





Foja: 1

la suma que el tribunal estime de acuerdo a su personal convicción, todo ello con reajustes, intereses más costas.

## DEBER LEGAL DEL FISCO DE CHILE DE RESPONDER POR LOS PERJUICIOS:

Al respecto sostuvo que el crimen en que se funda esta demanda, además de sus consecuencias penales, genera efectos civiles, consistentes en la obligación de reparar a las víctimas, ya que a quien acusa su autoría, a la fecha de su comisión, eran sin duda integrantes de una estructura estatal, los cuales se encontraba ejerciendo funciones propias de su cargo, responsabilidad que el Estado de Chile ha reconocido expresamente en estos hechos, a través del Informe emitido por la Comisión Nacional de Verdad.

Refirió que, normativamente, la obligación de indemnizar del Estado a los demandantes por el daño moral tiene su fuente tanto en el derecho público nacional como en el derecho público internacional.

1) Constitución Política del Estado de Chile: al respecto señaló que el crimen en que se funda esta demanda, además de sus consecuencias penales, genera efectos civiles, consistentes en la obligación de reparar a las víctimas y a sus familiares. En efecto, en el caso de autos, tratándose de un crimen de lesa humanidad, el estatuto normativo que regula la responsabilidad extracontractual del Estado, contenido en los artículos artículos 1º inciso cuarto, 5º, 6º, 7º, 19 N° 2º y 38º de la Constitución Política de la República, y artículos 4 y 44 de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional sobre Bases de la Administración del Estado, por expresa disposición del inciso segundo del artículo 5 de la Constitución Política, se extiende además a los convenios o tratados internacionales ratificados por Chile, a los principios generales del derecho internacional y al derecho consuetudinario internacional, fuentes del derecho internacional, indicó.



Foja: 1

2) Sistema de Protección Universal de Derechos Humanos: al respecto señaló que, atendido que los hechos generadores de la responsabilidad que se demanda tienen el carácter incontrovertible de crimen de lesa humanidad, la responsabilidad del Estado debe determinarse asimismo de conformidad con los convenios o tratados internacionales, las reglas de derecho internacional que se consideran ius cogens y el derecho consuetudinario internacional. Al respecto cabe señalar que “El Derecho Internacional”, tanto a partir de normas consuetudinarias como convencionales ha establecido que un hecho ilícito internacional genera la responsabilidad del Estado y la consiguiente obligación de reparar el daño. Para que esta responsabilidad pueda hacerse efectiva deben concurrir dos elementos. El primero de ellos es la violación de una obligación internacional, situación que en el caso presente se encuentra plenamente cumplida, porque así ha sido declarado en la sentencia criminal ejecutoriada, al calificar los hechos como constitutivos de crimen de lesa humanidad. El segundo elemento es el daño, el cual acreditaremos durante el procedimiento. En el ámbito del sistema de protección universal de los derechos humanos, el derecho de las víctimas a obtener reparación, constituye un principio general del derecho internacional cuyo contenido específico fue sistematizado por el Relator Especial Sr. Theo Van Boven, por encargo de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías. En efecto, en su decisión 1995/117, de 24 de agosto de 1995, pidió al Relator Especial que presentara, una serie revisada de los principios y directrices básicos en la materia a la luz de los instrumentos internacionales pertinentes en vigor. En la serie revisada y principios y directrices, se deberían tener en cuenta las observaciones recibidas de los Estados, las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, así como las secciones pertinentes del informe del grupo de trabajo sobre la administración de justicia y la cuestión de la indemnización. Concluido el trabajo, el Relator Especial presentó en la Sesión 49 la serie revisada de



Foja: 1

principios y directrices, bajo el título “Principios y directrices sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y al derecho humanitario a obtener reparación”, concluyendo en el acápite sobre “El derecho de restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y libertades fundamentales”, la imprescriptibilidad de las acciones civiles para demandar la indemnización por el daño causado con ocasión de la violación. Más recientemente, en el año 2006, la Resolución N° 60/147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 21 de marzo de 2006, que contiene los “Principios y directrices básicas sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional”, ratificó en su artículo 6, párrafo 4, el carácter imprescriptible de las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de las violaciones graves del derecho internacional humanitario que constituyan crímenes en virtud del derecho internacional, cuando así se disponga en un tratado aplicable o forme parte de otras obligaciones jurídicas internacionales. Agregando a continuación en el numerando 7, que tratándose de otro tipo de violaciones que no constituyan crímenes en virtud del derecho internacional, incluida la prescripción de las acciones civiles y otros procedimientos, no deberían ser excesivamente restrictivas. En consecuencia, hoy no queda duda alguna que a la luz del Derecho Internacional General, las acciones indemnizatorias son imprescriptibles tratándose como en el caso de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario que constituyan crímenes en virtud del derecho internacional. Por último, cabe señalar que el referido carácter obligatorio de los cánones de ius cogens concluyó con su transformación en derecho convencional por obra de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, ratificada por Chile el nueve de mayo de 1981, la que dispone en su artículo 53 que "es nulo



Foja: 1

todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general”. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter; indicó.

3) Convención Americana de Derechos Humanos: al respecto expresó que la CIDH, haciendo aplicación del artículo 1.1 y 63.1, ha desarrollado una vasta jurisprudencia sobre el derecho a la reparación. Ha fundamentado este derecho no solo en la aplicación de principios provenientes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como la Declaración Americana de Derechos del Hombre, la Carta de la OEA o la misma CADH, sino del principio proveniente del derecho internacional público sobre responsabilidad de los Estados ante el incumplimiento de sus obligaciones . Ha afirmado que la obligación de los Estados de reparar las violaciones a derechos humanos cometidas, contenida en el artículo 63.1 de la Convención “constituye una norma consuetudinaria que es, además uno de los principios fundamentales del derecho de gentes”. Desde su primer caso de carácter contencioso la Corte ha entendido que la obligación de los Estados de reparar a las víctimas de sus infracciones a la Convención como una obligación jurídica fundada en el derecho internacional público, y regulada enteramente por éste. Incluso ha señalado que esta es una concepción general del derecho, afirmando su postura en una decisión del a Corte Permanente de Justicia Internacional y en otra de su sucesora la CIJ. ( Corte permanente de Justicia Internacional, Judgment N°13, 1927. P.C.I.J, Series A, N°9, Factory at Chorzow, Reportis 1949, pag. 184, citadas en ibíd..parr.25) ; Corte Internacional de Justicia, Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion , I.C.J.



Foja: 1

Los principios establecidos por la Corte Interamericana en sus múltiples sentencias pueden resumirse en los siguientes: a. que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta la obligación de ser reparada; b. que la reparación del daño consiste en la plena restitución, incluido el daño moral; c. que la indemnización por violación de los derechos humanos encuentra su fundamento en los instrumentos internacionales de carácter universal y regional, basándose en los repetidos pronunciamientos hechos por el Comité de derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el pago de violaciones a los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en base a su Protocolo facultativo, y por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; d. y que los fundamentos para fijar la indemnización no pueden estar limitados por el derecho interno, regulándose por la Convención y los principios del derecho internacional. Por otra parte, la segunda oración del artículo 63.1 impone a la Corte una obligación diferente, si bien complementaria a la anterior. Ella establece que, al decidir si ha habido una violación de un derecho o libertad protegidos en la Convención, la Corte dispondrá que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. La Corte Interamericana ha aclarado, además, que el artículo 63.1 de la convención no remite al derecho interno para el cumplimiento de la responsabilidad del Estado, de modo que la obligación no se establece en función de los defectos, imperfecciones o insuficiencias del derecho nacional, sino con independencia del mismo (Caso Velásquez Rodríguez).

4) A continuación citó jurisprudencia nacional sobre la materia, concluyendo en definitiva que la Excma. Corte Suprema ha señalado la imprescriptibilidad y la procedencia de la indemnización civil en los daños que derivan de delitos de lesa humanidad con una reiterada y profusa Jurisprudencia sobre el asunto.



Foja: 1

Alegó que, por otra parte, y mirando a la concurrencia de los elementos de la responsabilidad, siendo el daño moral producido la consecuencia inmediata y directa de un crimen de lesa humanidad cometido por agentes de un órgano del Estado, y existiendo entre la acción criminal y el perjuicio experimentado una relación de causa a efecto, se verifican todos los presupuestos legales para hacer efectiva la responsabilidad del Estado. Es por lo expuesto que el demandado debe responder por el daño psicológico y emocional ocasionado a la demandante puesto que se dan todos los supuestos necesarios para que se verifique la responsabilidad civil del Estado, afirmó.

**Solicitó concretamente** que en definitiva se declare que el demandado deberá pagar a la demandante doña ALBINA PRUDENCIA RODRIGUEZ AVERANGA, a título de indemnización de perjuicios, por el daño moral propio sufrido, la suma de \$250.000.000 (doscientos cincuenta millones de pesos) más reajustes e intereses correspondientes al máximo convencional, desde la fecha de la sentencia definitiva de primera instancia que declare el derecho a la indemnización demandada y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que el tribunal estime ajustada a derecho y equidad y al mérito de autos; todo con costas.

En folio 7 consta el emplazamiento de la demandada.

En folio 8 el apoderado del FISCO DE CHILE **contestó la demanda** dirigida en su contra, en el tenor que se reproduce a continuación:

1.- “EXCEPCIÓN DE REPARACION INTEGRAL. IMPROCEDENCIA DE LAS INDEMNIZACIONES ALEGADAS POR HABER SIDO YA INDEMNIZADA LA DEMANDANTE”:

Al respecto señaló lo siguiente:

1.1.- Marco general sobre las reparaciones ya otorgadas.



Foja: 1

Expuso que no resulta posible comprender el régimen jurídico de este tipo de reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos si no se posicionan correctamente estas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional. En efecto, dicha comprensión sólo puede efectuarse al interior –y desde– lo que ya es común considerar, el ámbito de la llamada “Justicia Transicional”. Sólo desde esa óptica puede mirarse en mejores condiciones los valores e intereses en juego en esta disputa indemnizatoria. En efecto, el denominado dilema “justicia versus paz” es, sin lugar a dudas, uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional. Argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país, deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así pronunciar aquel imperioso “nunca más”. En esta perspectiva, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema. Por otro lado, no debe olvidarse que desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Recordemos que el éxito de los procesos penales se concentra sólo en el castigo a los culpables no preocupándose del bienestar de las víctimas. En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación. Estos programas, en efecto, incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero<sup>3</sup>. En



Foja: 1

este sentido, no es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones. Basta para ello revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de nuestra ley N° 19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ella. No debe extrañar que muchas de esas negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estiman más lejanos, se compensen algunos daños y se excluyan otros o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño.

### 1.2.- La complejidad reparatoria:

Al respecto indicó que los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno del Presidente Patricio Aylwin en lo que respecta a la justicia transicional fueron “(a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados; y (c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse”, según citó. En lo relacionado con aquel segundo objetivo, la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamada Comisión Rettig, en su Informe Final propuso una serie de “propuestas de reparación” entre las cuales se encontraba una “pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas” y algunas prestaciones de salud. Dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente de la República envió al Congreso y que luego derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. El mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, “reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”. Por su parte, y en lo relativo a la forma en que se entendió la idea de reparación cabe indicar que el Ejecutivo, siguiendo el referido Informe de la





Foja: 1

comisión, entendió por reparación "un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe". A dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena, en "un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas". Compensación de daños morales y mejora patrimonial, son así dos claros objetivos de estas normas reparatorias. De esta forma, en la discusión de la ley 19.123 el objetivo indemnizatorio de este grupo de normas quedaría bastante claro. En diversas oportunidades, por ejemplo, se hizo referencia a la reparación "moral y patrimonial" buscada por el proyecto. La noción de reparación "por el dolor" de las vidas perdidas se encontrada también en otras tantas ocasiones. También está presente en la discusión la idea de que el proyecto buscaba constituir una iniciativa legal "de indemnización" y reparación. Incluso se hace expresa referencia a que las sumas de dinero acordadas son para hacer frente la "responsabilidad extracontractual" del Estado. Así las cosas, esta idea reparatoria se plasmó de manera bastante clara cuando dentro de las funciones de la Comisión se indicó que le corresponderá especialmente a ella promover "la reparación del daño moral de las víctimas" a que se refiere el artículo 18. Asumida esta idea reparatoria, la ley 19.123 y las demás normas conexas, han establecido los distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional; mencionó.

Expresó que, en ese orden de ideas, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber:

a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero;



Foja: 1

b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y

c) Reparaciones simbólicas.

Alegó que por medio de estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto de nuestro particular proceso de justicia transicional, que en lo que a este acápite respecta, busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas. Un análisis de estas compensaciones habilitará a V.S. a verificar el ámbito compensatorio que ellas han cubierto.

### 1.3.- Reparación mediante transferencias directas de dinero.

Al respecto señaló que diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones. La ley 19.123 ha sido, en este concepto, la más importante. Es necesario destacar que en la discusión legislativa de esta norma se enfrentaron principalmente dos posiciones acerca de la forma en que debía materializarse el proceso de reparación. Por un lado, algunos sostenían que la reparación que se iba a entregar debía hacerse a través de una suma única de dinero mientras, otros abogaban por la entrega de una pensión vitalicia. Ello no implicaba de manera alguna que la primera opción tendría efectos indemnizatorios y no así la segunda. Ambas modalidades tendrían fines reparatorios. La referida Ley 19.123 estableció una pensión vitalicia para el cónyuge sobreviviente, la madre del causante o el padre de éste cuando aquella faltare o renunciare, la madre de los hijos de filiación no matrimonial del causante o el padre de éstos cuando aquella fuere la causante y los hijos menores de 25 años de edad, o discapacitados de cualquier edad. En una primera etapa, esta pensión ascendió a la cantidad de \$140.000.- mensuales. Sin embargo, luego de varias negociaciones se acordó aumentar su monto. Tal como se indicó en el proyecto de ley que establecería esa reforma, se buscaba con él “avanzar hacia un punto de máximo acuerdo, de máxima verdad, de máxima justicia, de máxima



Foja: 1

reparación". Dicho proyecto dio lugar a la ley 19.980 y de conformidad al art. 2° de esa norma, el monto de la pensión se incrementó a contar del 1 de diciembre de 2004 en un 50%. A dicha suma debe añadirse el porcentaje equivalente a la cotización de salud. Sin dicha cotización de salud, el monto actual de la pensión para el grupo familiar asciende a la suma de \$210.000.- mensuales.

Por otra parte, la referida Ley 19.980 incorporó al padre como beneficiario no sólo cuando la madre faltare, sino también cuando ella haya dejado o dejare de percibir la pensión por renuncia o fallecimiento e incrementó a un 40% el beneficio reparatorio para la madre o el padre de los hijos de filiación no matrimonial del causante.

En términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2019, en concepto de:

a) Pensiones: la suma de \$247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la Ley

19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech);

b) Bonos: la suma de \$41.910.643.367.- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737.- por la ya referida Ley 19.992;

c) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123; y,

d) Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$23.388.490.737.-

Expresó que, en consecuencia, a diciembre de 2019, el Fisco había desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.-

Argumentó que, siguiendo desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por



Foja: 1

la vida del beneficiario, ello no obsta a que podamos valorizarla para poder saber cuál fue su impacto compensatorio. Pues bien, el cálculo de los efectos indemnizatorios de una pensión vitalicia puede realizarse simplemente sumando las cantidades pagadas a la fecha, como asimismo las mensualidades que todavía quedan por pagar. Como puede apreciarse el impacto indemnizatorio de este tipo de pensiones es bastante alto. Ellas son, como se ha entendido de manera generalizada, una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos obteniéndose con ello, compensaciones razonables que están en coherencia con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares. Además de la indicada pensión, tanto la Ley 19.123 como la 19.980 consagran otras transferencias directas de dinero que se han creado con idénticos fines reparatorios. En primer lugar, y de conformidad al artículo 23 de la Ley 19.123, se entregó a los familiares de las víctimas una bonificación compensatoria de un monto único equivalente a doce meses de pensión. Para el caso que se solicite hoy, por ejemplo, esa compensación equivaldría a \$2.520.000. En la misma línea, la Ley 19.980 otorgó, por una sola vez, un bono de reparación de \$10.000.000.- para los hijos del causante que nunca recibieron la pensión mensual de reparación, y por la diferencia que corresponda para aquellos que la recibieron, pero han dejado de percibirla. Finalmente, los hijos de los causantes que se encuentren cursando estudios media jornada tendrán derecho a un subsidio mensual equivalente a 1.4 UTM, esto es, al día de hoy \$86.476.

#### 1.4.- Reparaciones específicas:

Al respecto refirió que, conforme se acreditará en la oportunidad pertinente, la demandante ha recibido pagos específicos en dinero, por aplicación de la Ley 19.123 y sus modificatorias.

1.5.- Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas:



Foja: 1

Al respecto señaló que, tal como sucede en la mayoría de los procesos de justicia transicional, la reparación no se realiza sólo mediante transferencias monetarias directas, sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones. En efecto, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha señalado que el objetivo de un programa de reparación es garantizar que todas las víctimas reciban un tipo de reparación, aunque no sea necesariamente de un mismo nivel o de la misma clase.

Alegó que, en este sentido, la ley 19.123 ha incorporado en el patrimonio de los familiares de las víctimas de DDHH los siguientes derechos:

a) Indicó que todos los familiares del causante tendrán el derecho de recibir de manera gratuita las prestaciones médicas incluidas en el Régimen General de Garantías en Salud y las derivadas de embarazos. En general este tipo de beneficios han sido agrupados en el denominado Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS). Ciertamente, dicho programa es parte de una Política Pública de Reparación asumida por el Estado de Chile con las personas víctimas de violaciones a los derechos humanos en el periodo de septiembre de 1973 a marzo de 1990, según se dispone en las leyes 19.123, 19.980, 19.992 y 20.405. En este sentido, las personas acreditadas como beneficiarias del Programa, tiene derecho a la gratuidad de las prestaciones médicas que se otorgan en todos los establecimientos de salud de la red asistencial pública, independiente de la previsión social que sostengan, accediendo a toda la oferta de atención de salud que otorga el sector. Además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa. En la actualidad cuentan con un equipo PRAIS15 en los 29 Servicios de Salud, compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la



Foja: 1

magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios. A nivel presupuestario, PRAIS cuenta con un financiamiento de continuidad desde el año 2006. El año 2020, el Programa sostuvo un incremento presupuestario importante, siendo el presupuesto global de M\$6.543.883.-<sup>16</sup> Este presupuesto se distribuye por Servicio de Salud, permitiendo cubrir gastos asociados al recurso humano de los equipos de salud PRAIS, equipamiento y para la adquisición de ayudas técnicas o prestaciones que requieren beneficiarios en el extra sistema, focalizando principalmente en la población directamente afectada y en el artículo 10 de la Ley 19.992.- Sin perjuicio de ello, como usuarios del sistema público de salud, los beneficiarios adquieren los derechos establecidos equivalentes para todos los usuarios FONASA; obtienen el derecho de organizarse y participar en los consejos de participación que la ley de Autoridad Sanitaria crea, tanto en los establecimientos como a nivel de la red y secretaría regional, y; adquieren el derecho a organizarse y cooperar con el equipo PRAIS en la difusión del programa y en la promoción del resto de los Derechos Humanos, indicó.

b) Refirió que los hijos de los causantes que sean alumnos de Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, sin aporte fiscal, y reconocidos por el Ministerio de Educación, tendrán un derecho al pago de la matrícula y del total del arancel mensual de cada establecimiento. Esta beca se encuentra normada por la Ley N° 19.123 y está destinada a los hijos de las personas declaradas víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política, de acuerdo a lo establecido por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, hasta los 35 años de edad. En cuanto a la duración del beneficio, tratándose de aquellas carreras con una duración inferior a 5 semestres, el beneficio cubrirá hasta un semestre adicional. Para aquellas carreras con una duración igual o superior a 5 semestres, el beneficio cubrirá hasta dos semestres



Foja: 1

adicionales. Asimismo, dichos beneficios podrán extenderse hasta por un año, inmediatamente posterior al egreso de los estudios de nivel superior, cuando se requiera rendir un Examen de Grado o Licenciatura, o presentar una Memoria para su aprobación, siendo éste beneficio complementario a la extensión semestral de los beneficios educacionales.

Expuso que, referente a este tipo de beneficios cabe hacer presente que ellos fueron pensados -desde sus orígenes- como una forma de compensación precisamente por los gastos que la persona ausente habría soportado de no haberse producido el hecho ilícito. Así lo señalaron, por lo demás, los propios representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos cuando indicaron que “la pensión, las becas de estudio y los beneficios de salud que se contemplan son una forma que tiene el Estado de asumir la responsabilidad que habría correspondido al ausente en el grupo familiar, y que éste no pudo tomar sobre sí, como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos”. En este sentido, al 31 de diciembre de 2015 los desembolsos asumidos por el Estado de Chile, invocando los beneficios o becas, respecto a los familiares de las víctimas de DDHH, como alumnos de Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica ascienden a \$90.977.774.148.

#### 1.6.- Reparaciones simbólicas:

Al respecto expuso que, al igual que todos los demás procesos de justicia transicional<sup>19</sup>, parte importante de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de DD.HH. se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor – siempre discutible en sus virtudes compensatorias– sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte



Foja: 1

logre reparar el dolor y la tristeza y con ello reducir el daño moral. La doctrina, en este sentido, se ha inclinado por estimar que la indemnización del daño moral tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente en dar a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio, que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables. Así, Fueyo refiriéndose a la naturaleza de la reparación del daño extra patrimonial, expresa que debe descartarse que sea una reparación compensatoria del modo que se entiende en el derecho patrimonial, “pues aquí resulta de partida absurdo compensar, esto es, fijar una medida igual o equivalente, siendo que el daño mismo a indemnizar no es susceptible de medición exacta. En contraposición, se trata simplemente de una indemnización satisfactiva, esto es, que intenta satisfacer a la víctima. Tomando este verbo justamente en dos de sus acepciones oficiales, según el Diccionario de la Real Academia Española, resulta lo siguiente: a) “Hacer una obra que merezca perdón de la pena debida” y b) “Aquietar y sosegar las pasiones del ánimo”. En esta compleja tarea de entregar una compensación satisfactiva destaca la ejecución de diversas obras de reparación simbólica como las siguientes: a) La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago realizada en el año 1993; b) El establecimiento, mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día Nacional del Detenido Desaparecido. Se elige el día 30 de agosto de cada año en atención a que la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha instituido este día como día internacional del detenido-desaparecido; c) La construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Esta obra fue inaugurada el 11 de enero de 2010 y su objetivo es dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre los años 1973 y 1990 y que quedaron plasmados en imágenes, íconos, documentos o monumentos; d) El establecimiento, mediante Ley N° 20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos; e) La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país





Foja: 1

y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las Infracciones a los DDHH tales como Villa Grimaldi y Tocopilla, entre otras. Destacan, el “Memorial de los prisioneros de Pisagua” en el Cementerio de esa ciudad; el Mausoleo “Para que nunca más” en el Cementerio 3 de Iquique; el Memorial “Si estoy en tu memoria, soy parte de la historia” en las afueras del Cementerio Municipal de Tocopilla; el Memorial “Parque para la Preservación de la Memoria Histórica de Calama” en el camino a San Pedro de Atacama; el Memorial en homenaje a 31 víctimas de Antofagasta en la puerta principal del Cementerio General de la ciudad; el “Memorial en homenaje a los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región de Atacama” en el Frontis del Cementerio Municipal de esa ciudad; el “Memorial por los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos” en la Plaza de Armas de Curacaví; el “Memorial a las víctimas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas del Partido Socialista” en la sede de este partido; el “Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca” en esa ciudad; y el “Memorial Escultórico de los Derechos Humanos de Punta Arenas” en el Cementerio Municipal de esa ciudad. Todos ellos unidos a un sinnúmero de otras obras menores como monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, esculturas, pinturas, etc.; refirió.

1.7.- La identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas:

Al respecto mencionó que, de todo lo expresado hasta ahora puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH. han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los DDHH. Así las cosas, tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden



Foja: 1

compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente.

A continuación citó jurisprudencia sobre el particular.

Enseguida, señaló que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha considerado los beneficios de establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas que no genere desigualdades. En el documento denominado “Herramientas Jurídicas para Estados Post- Conflictos” (Rule of Law Tools for Post-conflicts States) se ha referido expresamente a los programas de reparación. En él se ha reconocido la existencia de un problema al exigir indemnización por la vía de los programas de reparación y paralelamente, ejercer una acción civil, por la vía judicial. Así, indica que una vez que el Gobierno ha hecho esfuerzos de buena fe en crear un sistema administrativo que facilita la entrega de beneficios a las víctimas, permitir a los mismos beneficiarios iniciar litigios contra el Estado genera el peligro de obtener un doble beneficio por el mismo daño. Pero todavía peor, ello pone en riesgo el sistema de reparaciones en su totalidad, puesto que mientras el primer problema puede ser fácilmente solucionado estipulando que no pueden perseguirse beneficios dos veces por la misma violación, el segundo no es fácilmente evitable toda vez que los beneficios obtenidos en los tribunales pueden fácilmente sobrepasar a los de un programa masivo de reparaciones. Esto puede generar un cambio en las expectativas y generalizar una sensación de desilusión con los programas administrativos. Incluso más, este cambio puede ser motivado por casos que seguramente no son representativos de todo el universo de víctimas y que más encima vienen a acentuar las desigualdades sociales entre las víctimas. De este modo, víctimas más educadas o pertenecientes a las ciudades tienen normalmente una probabilidad más alta de conseguir reparaciones por la vía de la litigación civil que



Foja: 1

víctimas más pobres, menos educadas, que habitan en el campo o que pertenecen a grupos étnicos, raciales o religiosos marginados (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (2008) Rule of Law tools for post-conflicts states. Reparations programmes, New York, United Nations, p. 35). En la misma línea, tal como indica Lira, es precisamente el rechazo a nuevas peticiones de indemnización lo que fortalece los programas de Justicia Transicional. Lo contrario, esto es, dar lugar nuevamente a demandas de indemnización de perjuicios, genera inevitablemente un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones generando el efecto de debilitar la decisión política y administrativa de reparación (Lira, Elizabeth, The Reparations Policy for Human Rights Violations in Chile, ahora en de Greiff, Pablo, ed. The Handbook of Reparations (Oxford, Oxford University Press, 2006), p. 94), refirió.

Expuso que, en conclusión, estando la acción interpuesta en autos basadas en los mismos hechos y pretendiendo indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias, ya enunciadas, al tenor de documentos oficiales que serán acompañados en su oportunidad, opone la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizados los demandantes de la presente que comparecen en calidad de cónyuge, madre o hijos de las víctimas (sic).

## 2.- OPUSO EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA:

### 2.1.- Normas de prescripción aplicables.

Al respecto mencionó que, a mayor abundamiento, opone respecto de la acción indemnizatoria que contesto por medio del presente escrito, la excepción de prescripción extintiva con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2.497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescritas éstas, se rechace la demanda, en todas sus partes.



Foja: 1

Refirió que, según lo expuesto en la demanda, el desaparecimiento de la víctima don ISIDORO CASTRO VILLANUEVA, ocurrió el 31 de mayo de 1977.

Indicó que, aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las víctimas o sus familiares de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, o aún, hasta la entrega pública del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, hechos acaecidos el 11 de marzo de 1990 y 4 de marzo de 1991, respectivamente, a la fecha de notificación de la demanda al Fisco de Chile, esto es, el 10 de enero de 2023, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil.

Alegó que, en consecuencia, opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2.332 del Código Civil.

Señaló que, en subsidio, en caso de que se estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de las acciones civiles que contesto, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.

## 2.2.- Generalidades sobre la prescripción:

Al respecto alegó que, Por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles. “Cuando no se establece la prescripción de un determinado derecho y tampoco su imprescriptibilidad, ese derecho, de acuerdo con la regla general, es prescriptible”. Por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe. Pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto



Foja: 1

constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves, absurdas y perturbadoras. Por eso es que la jurisprudencia ha señalado que “para que un derecho de índole personal y de contenido patrimonial sea imprescriptible, es necesario que exista en nuestra legislación disposiciones que establezcan su imprescriptibilidad.”. Sobre esta materia cabe recordar que la prescripción es una institución universal y de orden público. Efectivamente, las normas del Título XLII del Código Civil, que la consagran y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2.497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, cuyo tenor es el siguiente: “Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”. Esta última disposición consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares (que es el sentido de la expresión “igualmente” que emplea el precepto) la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como lo señala el artículo 547, inciso 2º, del Código Civil, se rijan por leyes y reglamentos especiales, expreso.

Argumentó que la prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente (artículo 2.494, inciso 1º, del Código Civil). La responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio, reponiendo en el patrimonio dañado, el menoscabo que haya sufrido. Toda acción patrimonial crediticia se extingue por prescripción, de conformidad con los artículos 2.514 y 2.515 del Código Civil, indicó.



### 2.3.- Fundamento de la prescripción.

Al respecto señaló que la prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida. Por ello es posible, sin duda, que la prescripción se produzca sin que el acreedor haya recibido lo que le corresponda y sin que haya tenido, con ello, intención de remitir la deuda de que se trate. Al acreedor tendrá que reprocharse una grave negligencia, pero, por encima de su interés personal, se impone la necesidad de fijar un término a las acciones. En la práctica, los pocos casos en que la prescripción produce resultados chocantes, ellos no pueden compararse con los infinitos casos en que viene a consolidar y a proteger situaciones regulares y perfectamente justas. La prescripción extintiva, un modo de extinción de las obligaciones - que al igual que en la usucapión cumple una función de adquisición y otro de prueba del derecho- es llamada con bastante propiedad por la doctrina como un modo de liberación de las obligaciones, o sea, algo más que su extinción. De esta manera, los planteamientos doctrinarios anteriores nos permiten concluir que la prescripción, por sobre todas las cosas, es una institución estabilizadora. Está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe un bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas. Por las mismas razones es preciso consignar que la prescripción no es -en sí misma- como usualmente se piensa, una sanción para los acreedores y un beneficio para los deudores. Sanción o beneficio, en su caso, no son más que consecuencias indirectas de la protección del interés general ya referido. Resulta inaceptable presentar a la prescripción extintiva como una institución abusiva de exención de responsabilidad, contraria o denegatoria del derecho a reparación contemplado en la



Foja: 1

Constitución Política y en los Tratados Internacionales. No está demás decir que la prescripción no exime la responsabilidad ni elimina el derecho a la indemnización. Solamente ordena y coloca un necesario límite en el tiempo para que se deduzca en juicio la acción. Por otro lado, como más adelante veremos, no hay conflicto alguno entre la Constitución Política y la regulación del Código Civil. Lo habría si aquellos textos prohibieran la prescripción o si el derecho interno no admitiere la reparación vía judicial oportunamente formulada. En ausencia de ese conflicto, no hay contradicción normativa. En la especie, el ejercicio de las acciones ha sido posible durante un número significativo de años, desde que los demandantes estuvieron en situación de hacerlo, sostuvo.

2.4. y 2.5.- En estos puntos citó jurisprudencia sobre la materia.

2.6.- Contenido patrimonial de la acción indemnizatoria:

Al respecto señaló que la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de la misma, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción. Sobre el particular debe considerarse, como reiteradamente se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la más nueva y reiterada jurisprudencia<sup>34</sup>, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial. En efecto, basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición,



Foja: 1

tales como renuncia o transacción (incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos), por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de una acción ajena a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de la misma.

#### II.2.7.- Normas contenidas en el Derecho Internacional:

Al respecto expuso que, finalmente, en relación con las alegaciones expuestas por todos los actores en cuanto que la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, en este sentido, mi parte se hará cargo en particular de ciertos instrumentos internacionales, aunque no todos ellos aparecen citados en la demanda, adelantando desde ya que ninguno contempla la imprescriptibilidad de la acción civil derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia. La “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad”, aprobada por Resolución N.º 2.391 de 26 de Noviembre de 1968, y en vigor desde el año 1970, en su artículo 1º letras a) declara imprescriptibles a “los crímenes de guerra; y b) a los crímenes de lesa humanidad; pero cabe señalar –tal como lo ha reconocido la Excma. Corte Suprema<sup>35</sup>– que en ninguno de sus artículos declara la imprescriptibilidad de las acciones civiles para perseguir la responsabilidad pecuniaria del Estado por estos hechos, limitando esta imprescriptibilidad a las acciones penales. Los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile en 1951, se refieren exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias, tal como ha resuelto nuestro Máximo Tribunal. La Resolución N° 3.074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada “Principios de Cooperación





Foja: 1

Internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad”, se refiere exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias. La Resolución N.º 60/147, de 21 de marzo de 2006, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que contiene “los principios y directrices básicas sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, la que a diferencia de lo que acontece en materia penal, reconoce la legitimidad y procedencia de la prescripción en el derecho interno de los Estados. Así, en el N.º 6 del Título IV. Prescripción, señala: “6.- Cuando así se disponga en un tratado aplicable o forme parte de otras obligaciones jurídicas internacionales no prescribirán las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos ni las violaciones graves del derecho internacional humanitario que constituyan crímenes en virtud del derecho internacional.”, indicó.

Señaló que, de esta manera, la recomendación de la comunidad internacional es clara en distinguir entre acciones penales y las acciones civiles que nacen de los mismos hechos; así como en disponer que, mientras las primeras jamás deben prescribir, las segundas, en cambio, si pueden hacerlo, a menos que exista un tratado que así lo contemple expresamente, lo que no acontece.

Agregó que la Convención Americana de Derechos Humanos, respecto de la que hemos de señalar que sin perjuicio que la aplicación de dicho Tratado no es atingente al caso sub-lite puesto que, en la época en que acontecieron los hechos, no estaba vigente, dado que su promulgación se produjo por Decreto Supremo N° 873, publicado en el Diario Oficial el 5 de enero de 1991; ninguna duda



Foja: 1

cabe que la citada normativa no establece la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria, En relación a esta Convención debe destacarse que al efectuar la ratificación, conforme al inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, Chile formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, de 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990. Por otra parte, el artículo 63 de la Convención se encuentra ubicado en el Capítulo VIII, relativo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en la sección segunda de dicho capítulo, referido a la competencia y funciones de esa Corte, facultando exclusivamente a dicha Corte Interamericana para imponer condenas de reparación de daños y, por lo mismo, no impide la aplicación del derecho interno nacional ni de la institución de la prescripción en Chile. La norma establece: “63.1.- Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de sus derechos o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”. Es decir, el mandato contenido en esa disposición está dirigido a la Corte Interamericana y no a nuestros Tribunales, quienes deben aplicar la normativa de derecho interno que rige la materia.

Agregó que el planteamiento de esta defensa fiscal ha sido reconocido por nuestro más alto Tribunal del país, citando jurisprudencia al efecto.

Estimó que, no habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la



Foja: 1

imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, S.S. no puede apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2.332 y 2.497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado, agregando que, con el mérito de lo expuesto precedentemente se deberá rechazar la demanda indemnizatoria que contesto por encontrarse prescritas las acciones civiles deducidas.

### 3.- EN SUBSIDIO, ALEGACIONES EN CUANTO AL DAÑO E INDEMNIZACIONES RECLAMADAS:

Al respecto manifestó que, con relación al daño moral hacemos presente que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades morales. Así, entonces, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente. Ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria. En términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso. Tratándose del daño puramente moral, por afectar a bienes extra patrimoniales o inmateriales y, por lo mismo, no apreciables en dinero, la indemnización no hace desaparecer el daño, ni tampoco lo compensa en términos de poner a la víctima en situación equivalente a la que tenía antes de producirse aquél. El daño moral no se borra por obra de la indemnización. La pérdida o lesión producida por él permanece, a pesar de la indemnización. Por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo



Foja: 1

otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva. Es en la perspectiva antes indicada que hay que regular el monto de la indemnización, asumiendo la premisa que debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extra patrimonial sufrida. No habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica del responsable en un hecho delictual o cuasidelictual, habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, ni más ni menos, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado al pago<sup>38</sup>. En tal sentido, las cifras pretendidas en las demandas como compensación del daño moral resultan excesivas teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia, refirió.

4.- EN SUBSIDIO DE LAS EXCEPCIONES DE REPARACIÓN INTEGRAL Y PRESCRIPCIÓN, ALEGÓ QUE LA REGULACIÓN DEL DAÑO MORAL DEBE CONSIDERAR LOS PAGOS YA RECIBIDOS DEL ESTADO Y GUARDAR ARMONÍA CON LOS MONTOS ESTABLECIDOS POR LOS TRIBUNALES:

Mencionó que, en subsidio de las excepciones de reparación integral y prescripción extintiva de las acciones deducidas, esta parte alega en todo caso que en la fijación del daño moral por los hechos de autos, se debe considerar todos los pagos recibidos por la actora a través de los años por parte del Estado conforme a las leyes de reparación (19.123, 19.234, 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que seguirán percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral.



Foja: 1

De no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces. También es pertinente hacer presente a S.S. que para la adecuada regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia, lo que implica rebajar sustancialmente los montos pecuniarios demandados; alegó.

#### 5.- IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE REAJUSTES E INTERESES:

Expuso al respecto que, además de lo alegado, los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada. Cabe mencionar lo anterior, pues los actores solicitan el pago de reajustes e intereses desde la notificación de la demanda hasta su pago efectivo. Pues, bien a la fecha de interposición de la demanda de autos a tramitación, o de su notificación, y mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene mi representado de indemnizar, y por tanto no existe ninguna suma que deba reajustarse. Lo anterior implica que, en casos como el de autos, los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada. El reajuste es un mecanismo económico-financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal. Desde esta perspectiva, no procede aplicar la corrección monetaria a partir de una fecha anterior a la determinación del monto respectivo por sentencia ejecutoriada, indicó.



Foja: 1

Señaló que, respecto de los intereses, el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia. La jurisprudencia de nuestros tribunales superiores así lo han decidido de manera uniforme, por ejemplo, en fallo que aparece en el Tomo 55, sección 1°, página 95, de la revista de Derecho y Jurisprudencia, “En los juicios sobre indemnización (por responsabilidad extracontractual) no puede considerarse en mora a la parte demandada mientras no se establezca por sentencia ejecutoriada su obligación de indemnizar y el monto de la indemnización. Por tanto, no procede en esta clase de juicios hacer extensiva la demanda de cobro de intereses de la suma demandada o de la que se fije en el fallo que recaiga en el juicio.”. Por consiguiente, el hipotético caso de que S.S. decida acoger las acciones de autos y condene a mi representado al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y mi representado incurra en mora, indicó.

**Solicitó concretamente** que en definitiva se acojan las excepciones y defensas opuestas, y se rechace la acción en todas sus partes; o, en subsidio, que se fije el monto de la indemnización que pudiere corresponder, teniendo presente todo lo expuesto y los beneficios patrimoniales y extrapatrimoniales ya percibidos a través de las leyes de reparación.

En folios 11 y 13, respectivamente, las partes evacuaron los trámites de réplica y dúplica.

En folio 19, se dictó la interlocutoria de prueba, notificada según consta en folios 20 y 21, contra la cual no se interpusieron recursos.

En folio 32, se citó a las partes a oír sentencia.

**CONSIDERANDO:**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NNXQXKYSXCQ

Foja: 1

**PRIMERO:** Que doña ALBINA PRUDENCIA RODRIGUEZ AVERANGA interpuso, en juicio de hacienda, una acción de indemnización de perjuicios en contra del FISCO DE CHILE, representado judicialmente, en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado, por don JUAN ANTONIO PERIBONIO PODUJE, todos ya individualizados en autos, y, en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que se reproducen en la parte expositiva, solicitó concretamente que en definitiva se declare que el demandado deberá pagar a la demandante doña ALBINA PRUDENCIA RODRIGUEZ AVERANGA, a título de indemnización de perjuicios, por el daño moral propio sufrido, la suma de \$250.000.000 (doscientos cincuenta millones de pesos) más reajustes e intereses correspondientes al máximo convencional, desde la fecha de la sentencia definitiva de primera instancia que declare el derecho a la indemnización demandada y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que el tribunal estime ajustada a derecho y equidad y al mérito de autos; todo con costas.

**SEGUNDO:** Que el FISCO DE CHILE contestó el libelo entablado en su contra y, en virtud de las excepciones, alegaciones y defensas que se reproducen en la parte expositiva, solicitó concretamente que en definitiva se acojan las excepciones y defensas opuestas, y se rechace la acción en todas sus partes; o, en subsidio, que se fije el monto de la indemnización que pudiere corresponder, teniendo presente todo lo expuesto y los beneficios patrimoniales y extra patrimoniales ya percibidos a través de las leyes de reparación.

**TERCERO:** Que, Que, del análisis del contenido de los escritos que componen la etapa de discusión, se advierte que es un hecho no controvertido entre las partes, que don ISIDORO CASTRO VILLANUEVA, cónyuge de la demandante, fue víctima directa de represión política y violación a sus derechos humanos, cometida por agentes del Estado con ocasión de la dictadura cívico-militar que tuvo lugar en nuestro país a contar del 11 de septiembre de 1973.



Foja: 1

**CUARTO:** Que la controversia de hecho ventilada en autos, radica en determinar la existencia de los daños y perjuicios demandados; en la afirmativa, origen, naturaleza y monto de los mismos; la existencia de actos reparatorios e indemnizatorios ya otorgados a la demandante, con ocasión de los daños y perjuicios alegados por ella; en su caso, naturaleza, detalle, fecha de otorgamiento y monto de aquellos; hechos que configuran la prescripción alegada por el demandado, o su suspensión o interrupción; la existencia de actos de mitigación de los perjuicios alegados por el actor; y la existencia de una relación causal entre la actividad desplegada por el Estado de Chile, a través de sus agentes, y los daños alegados por la demandante.

**QUINTO:** Que la demandante aportó al juicio la PRUEBA DOCUMENTAL acompañada en folios 1 y 22, no objetada por su contraparte, y que consiste en:

1) Certificado de matrimonio entre doña Albina Prudencia Rodríguez Averanga y don Isidoro Castro Villanueva.

2) Certificado emitido por la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, referido a que la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación declaró la calidad de víctima de violación a los derechos humanos de don Isidoro Segundo Castro Villanueva, R.U.N. 6.074.282-0 .

3) Copia de la página 588 del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, referido a que dicha comisión estatal adquirió la convicción de que don Isidoro Segundo Castro Villanueva, fue objeto de desaparición forzada por parte de agentes del Estado.

4) Copia de querella interpuesta por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, con la finalidad de que se investigase la desaparición de cuatro personas en la ciudad de Arica en el año de 1977, entre ellas, el cónyuge de la demandante.





Foja: 1

5) Copia de querella interpuesta por la demandante en el año 2000, junto a las cónyuges de otros tres detenidos desaparecidos de Arica.

6) Copia de informe policial N° 235, de fecha 3 de agosto de 2002, emitido por la Policía de Investigaciones de Chile.

7) Copia de informe social efectuado a la demandante, doña Albina Prudencia Rodríguez Averanga, por la Licenciada en Trabajo Social, doña Mercedes Alarcón Lanas.

8) Copia de informe psicológico de doña Albina Prudencia Rodríguez Averanga, elaborado por profesionales del Equipo PRAIS del Servicio de Salud de Arica, en agosto de 2023.

9) Documento elaborado por el Instituto Latinoamericano de Salud Mental, "ILAS", referido a la asistencia y tratamiento de familiares de personas objeto de desapariciones forzadas y ejecutadas por razones políticas.

**SEXTO:** Que la demandada aportó al juicio la PRUEBA DOCUMENTAL acompañada en folio 24, no objetada por su contraparte, y que consiste en Oficio Ordinario DSGT N° 4792-11850, de fecha 10 de febrero de 2023, emitido por el INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL.

**SÉPTIMO:** Que, del análisis de los medios de prueba legalmente rendidos en autos, consistentes en la instrumental reseñada en los motivos quinto y sexto, valorada conforme a lo prescrito en los artículos 342 y 346, del Código de Procedimiento Civil, y 1700, 1702 y 1706 del Código Civil, según la naturaleza de cada documento aportado, en relación, además, con lo dispuesto en los artículos 426 del Código de Procedimiento Civil y 1712 del Código Civil, se tienen por acreditados los siguientes hechos:

1.- Que don ISIDORO SEGUNDO CASTRO VILLANUEVA, cédula de identidad 6.074.282-0, y doña ALBINA PRUDENCIA



Foja: 1

RODRÍGUEZ AVERANGA, cédula de identidad 6.399.808-7, contrajeron matrimonio civil el 15 de noviembre de 1974.

2.- Que don ISIDORO SEGUNDO CASTRO VILLANUEVA, ya individualizado, tiene la calidad de víctima de violación a los derechos humanos, declarada por la COMISIÓN NACIONAL DE VERDAD Y RECONCILIACIÓN, por haber desaparecido el 31 de mayo de 1977, en las circunstancias que se detallan en el tomo 2, volumen 1, página 588, del informe del referido organismo estatal.

3.- Que, tras evaluación profesional psicológica realizada mediante el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), del Servicio de Salud de Arica, se constata en agosto de 2023, que doña ALBINA PRUDENCIA RODRÍGUEZ AVERANGA, cédula de identidad 6.399.808-7, presenta actualmente secuelas producto de la detención y desaparición de su cónyuge, ocurrida durante la dictadura cívico-militar de 1973.

**OCTAVO:** Que, en virtud de lo dispuesto precedentemente, corresponde proceder a emitir pronunciamiento sobre las pretensiones de las partes.

**NOVENO:** Que, con todo, en forma previa a la decisión de la acción indemnizatoria, es necesario resolver la **excepción de reparación integral**, opuesta por la demandada, cuyos fundamentos se reproducen en la parte expositiva.

Sobre el particular, las víctimas de prisión política y tortura son beneficiarias de los mecanismos de justicia transicional establecidos en la Ley N° 19.123, ampliada posteriormente por la Ley N° 19.980, de lo que se colige que el Estado de Chile, demandado en autos, ha reconocido en forma voluntaria y tácita, mediante la dictación de dichos cuerpos legales, el daño causado por el Estado a las víctimas de la dictadura y a sus familiares expresados en tales leyes, como asimismo su obligación de reparar ese daño producido por el Estado,



Foja: 1

encontrándose éste, por ende, en la necesidad de acreditar la extinción de la obligación de reparar, reconocida por el Fisco. En este sentido, la “reparación” alegada por el este último, corresponde sustantivamente a un pago del daño que se pretende reparar, esto es, un modo extinguir las obligaciones consagrado como tal en el artículo 1567 N°1 del Código Civil, correspondiendo al Fisco probar la efectividad de dicho pago, conforme a las reglas del onus probandi, con el objeto de enervar la pretensión contraria.

Por otro lado, la mentada Ley N° 19.123, conforme a su artículo 1°, creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, servicio público descentralizado, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Interior, cuyo objeto es la coordinación, ejecución y promoción de las acciones necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. En este sentido, el artículo 2 de la mencionada Ley consagra que le corresponderá especialmente a la Corporación, entre otras funciones, “Promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18 y otorgar la asistencia social y legal que requieran los familiares de éstas para acceder a los beneficios contemplados en esta ley”, razón por la cual su artículo 17 estableció “una pensión mensual de reparación en beneficio de los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la violencia política, que se individualizan en el Volumen Segundo del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y de las que se reconozcan en tal calidad por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación”, y, a su turno, el artículo 18 del cuerpo legal en mención dispone que “Serán causantes de la pensión de reparación las personas declaradas víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política, de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior”, debiendo considerarse también lo preceptuado en el artículo 24 del mismo texto normativo, en cuanto ordena que “La pensión de



Foja: 1

reparación será compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario”.

En consecuencia, el objeto de la Ley en comento es “promover” la reparación del daño moral a las víctimas a quienes se refiere, y no repararlo derechamente, finalidad esta última que es la que corresponde a una indemnización de perjuicios, y por esa razón reconoce expresamente que la pensión de reparación que la Ley crea, es perfectamente compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce actualmente o en el futuro el respectivo beneficiario.

Por su parte, efectivamente el Estado chileno ha efectuado distintos y variados esfuerzos de resarcimiento de perjuicios una vez concluida la dictadura, mediante diversas prestaciones establecidas en leyes especiales, amén del establecimiento de derechos y actos simbólicos de reparación, a pesar de lo cual, tales reparaciones han tenido un carácter general, siendo destinadas a una solución reparatoria abstracta y uniforme, pero por conceptos o motivos distintos al daño moral que específica y particularmente se ha demandado y acreditado en estos autos, lo cual, con todo, es razonable, en virtud del carácter general de los cuerpos normativos ya mencionados, los cuales, al tener la jerarquía normativa de una Ley, no han considerado la situación particular y personal de cada una de las personas víctimas de apremios ilegítimos ocurridos durante el período invocado en la demanda, como tampoco la situación de sus familiares o víctimas por rebote.

En dicho orden de ideas, uno de los requisitos del pago como modo de extinguir obligaciones, consiste en la integridad del mismo, exigencia que, en concepto de este Tribunal, no se cumple en la especie, en atención a lo establecido en el artículo 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al pago de una indemnización justa a la parte lesionada, es decir a cada



Foja: 1

persona en especial, y, en comparación, los mecanismos de reparación invocados por la demandada no se ajustan a la norma internacional referida, la que, de acuerdo a lo establecido en el inciso 2º del artículo 5 de la Constitución Política de nuestra República, debe ser cumplida por el Estado de Chile, so pena de comprometer su responsabilidad internacional.

A mayor abundamiento, la Excma. Corte Suprema ha declarado, en un caso análogo, que “la legislación nacional especial que aduce el Fisco y que sólo introduce un régimen de pensiones asistenciales, no contiene incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen, ni se ha demostrado que haya sido diseñada para cubrir toda merma moral inferida a las víctimas de atentados a los derechos humanos, puesto que se trata de modalidades diferentes de compensación, lo que hace que el hecho que las asuma el Estado voluntariamente no implica la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el régimen jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que franquea la ley” (Considerando 13º de la sentencia dictada por el Máximo Tribunal el 29 de marzo de 2016, en el Rol N°2289-2015).

En virtud de lo aquí razonado, el tribunal estima que las diversas prestaciones y beneficios alegados por la demandada no constituyen propiamente una reparación del daño moral sub lite que pueda ser calificada de integral, y, en consecuencia, no constituyen jurídicamente una indemnización de perjuicios, por lo cual **se desestimaré la excepción** de reparación integral opuesta por el demandado.

**DÉCIMO:** Que, abordando ahora la decisión de la **excepción de prescripción extintiva** opuesta por el Fisco, se debe tener presente que, sin perjuicio de que las normas relativas a la prescripción contenidas en el Título XLII del Libro IV del Código Civil son de aplicación general y encuentran su fundamento en las certeza que han de revestir las relaciones jurídicas, a juicio de este Tribunal en la



Foja: 1

materia sub lite resulta aplicable el mandato contenido en el artículo 5 inciso 2º de la Constitución Política de la República, conforme al cual “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. Lo anterior ha de ser relacionado con lo preceptuado en el artículo 2º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por el Estado chileno, instrumento internacional que obliga a los estados parte a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, “las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”. En relación con lo anterior, cobra aplicación el inciso 2º del artículo 38 de nuestra Carta Fundamental, que consagra el principio de responsabilidad del Estado por los actos de la Administración del mismo, principio que se encuentra reforzado mediante diversos textos de índole internacional, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica, que consagran como principio universal el respeto a los derechos fundamentales de la persona humana, y estatuyen que ninguna persona puede ser lesionada en éstos. Del mismo modo, la Convención de Ginebra (artículo 131) y la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados (artículo 27) impiden a los Estados aplicar el derecho interno con el fin de eludir responsabilidad de índole internacional, como ocurre en el caso de los derechos humanos, por lo que estas normas deben interpretarse en el sentido amplio, lo que conduce a concluir que es deber del Estado reparar el daño causado a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, por tratarse dicha reparación de un derecho fundamental, el que por su propia naturaleza es imprescriptible. A mayor abundamiento, el artículo 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que nadie debe ser sometido a torturas ni a tratos crueles inhumanos o



Foja: 1

degradantes, y, si bien la acción indemnizatoria tiene un contenido patrimonial, obedece a la índole humanitaria de la protección a los derechos humanos regulados y reconocidos el instrumento internacional referido, cuya aplicación, en definitiva, prima sobre las normas internas de derecho privado, y, específicamente, sobre el artículo 2497 del Código Civil.

En consecuencia, las acciones emanadas de hechos públicos y notorios constituidos por las violaciones contra los derechos humanos cometidas en nuestro país durante la época de lo que se ha denominado dictadura militar, de acuerdo a la normativa nacional e internacional vigente tienen el carácter de imprescriptibles por tratarse de crímenes de lesa humanidad, al atentar contra los derechos fundamentales e inherentes a la persona humana, por lo que un acto ilícito de esa naturaleza, conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, genera tres obligaciones imprescriptibles para el Estado que ha incurrido en dicha infracción, las que se refieren a investigar las violaciones denunciadas, sancionar a los responsables y reparar íntegramente a las víctimas.

Por otro lado, cabe señalar que la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad dispone en su artículo 4 la imprescriptibilidad de la acción penal emanada de los crímenes referidos en su artículo 1, entre otros, los de lesa humanidad, situación que no exige necesariamente la exclusión de la imprescriptibilidad de la acción civil, de acuerdo a lo dispuesto en los párrafos tercero, cuarto, sexto y séptimo de la referida Convención.

Adicionalmente, nuestro Máximo Tribunal, en un caso análogo, ha declarado que “tratándose de un delito de lesa humanidad -lo que ha sido declarado en la especie- cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la correlativa acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contempladas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad



Foja: 1

expresa manifestada por el sistema internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional, en armonía con el inciso segundo del artículo 5 de la Carta Fundamental, que insta el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los males experimentados como consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que en virtud de la Ley 19.123, reconoció en forma explícita la innegable existencia de los daños y concedió a los familiares de aquellos calificados como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período que va desde 1973 hasta 1990, regalías de carácter económico o pecuniario. En esta línea discurren también los Roles Nos. 20.288-14, 1.424-2013, 22.652-2014, entre otros. Por ende, cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual, resulta discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad indispensables en un Estado de derecho democrático. Entonces, pretender el empleo de las disposiciones del Código Civil en la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el régimen jurídico, hoy resulta improcedente” (Excma. Corte Suprema, Rol N° 2289-2015, sentencia de 29 de marzo de 2016).

A mayor abundamiento, recientemente la Excma. Corte Suprema ha declarado que el derecho de las víctimas a percibir la compensación correspondiente implica, desde luego, la reparación de todo daño que les haya sido ocasionado, lo que se posibilita con la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en nuestra legislación interna, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución Política de la República, en cuanto el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, por lo cual no resultan atingentes las normas del derecho interno previstas en el





Foja: 1

Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, al estar en contradicción con las reglas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que protegen el derecho de las víctimas y familiares a recibir la reparación correspondiente, estatuto normativo internacional que ha sido reconocido por Chile y que, sin perjuicio de la data de su consagración y reconocimiento interno, corresponden a normas de ius cogens, derecho imperativo internacional que protege valores esenciales compartidos por la comunidad internacional que debe ser reconocido por los jueces de la instancia al resolver la demanda intentada (Excma. Corte Suprema, Rol N°130.949-2020, sentencia de 06 de junio de 2022).

Así las cosas, emanando la acción patrimonial de las víctimas por repercusión, directamente a partir de la comisión de un crimen de lesa humanidad -cometido contra la víctima directa- regulado en el estatuto internacional al cual debe someterse el Estado de Chile, corresponderá **desestimar la excepción** de prescripción extintiva opuesta por el Fisco.

**UNDÉCIMO:** Que, abordando el fondo de la **acción indemnizatoria** entablada, ésta encuentra su consagración positiva a partir de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 38 de la Constitución Política de la República, que prescribe que “Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño”, lo que constituye un principio constitucional de responsabilidad estatal recogido posteriormente en el artículo 4 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que consagra una acción general de responsabilidad por daños, al establecer que “El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin



Foja: 1

perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”, y el artículo 44 de la misma Ley, que delimita la acción anterior al disponer que “Los órganos de la Administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio. No obstante, el Estado tendrá derecho a repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en falta personal”.

De este modo, los elementos o requisitos de procedencia de la responsabilidad perseguida en autos, son: a) una acción u omisión de un órgano o agente estatal; b) que dicha acción u omisión tenga su origen en una falta de servicio; c) que dicha acción u omisión originada por falta de servicio, cause un daño o lesión en los derechos de un particular administrado; d) que entre la acción u omisión y el daño exista una relación de causa y efecto, respectivamente; a lo que se puede añadir un último requisito, a saber, que el daño no se encuentre indemnizado, toda vez que la indemnización de perjuicios en nuestro ordenamiento jurídico no puede ser fuente de lucro ni configurar un enriquecimiento sin causa, dado que tiene una finalidad compensatoria o, al menos, satisfactiva, cuando se trata del daño moral, debiendo cubrir la efectiva extensión del perjuicio que se trata de resarcir.

**DUODÉCIMO:** Que, en cuanto a la concurrencia del primer requisito de procedencia señalado en el motivo anterior, esto es, una acción u omisión de un órgano o agente estatal, se tendrá por acreditada la existencia de una acción ejecutada por agentes del Estado de Chile en contra de la víctima directa, don ISIDORO SEGUNDO CASTRO VILLANUEVA, cédula de identidad 6.074.282-0, al tener indubitadamente la calidad de víctima de violación a los derechos humanos, declarada por la COMISIÓN NACIONAL DE VERDAD Y RECONCILIACIÓN, por haber desaparecido el 31 de mayo de 1977, en las circunstancias que se detallan en el tomo 2, volumen 1, página 588, del informe del referido organismo estatal.



Foja: 1

**DECIMOTERCERO:** Que, en cuanto a la concurrencia en el caso sub lite del segundo de los requisitos de procedencia indicados en el apartado undécimo, esto es, que la acción de agentes del Estado señalada en el considerando anterior, haya tenido su origen en una falta de servicio, se debe tener presente que la más general de las condiciones de responsabilidad de la Administración y de las municipalidades está definida genéricamente, sin mayores precisiones, como “falta de servicio” (Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, artículo 42; Ley Orgánica de Municipalidades, artículo 137). El estatuto de responsabilidad de la Administración vigente en Chile se ha construido sobre la base del modelo francés de responsabilidad del Estado, donde la jurisprudencia ha concebido la falta de servicio como la infracción a un deber objetivo de conducta, que es análogo al concepto civil de culpa. Ambas nociones suponen un juicio objetivo de reproche sobre la base de un patrón de conducta: mientras en la culpa civil se compara la conducta efectiva del agente con el estándar abstracto de conducta debida en nuestras relaciones recíprocas, en la falta de servicio tal comparación se efectúa entre la gestión efectiva del servicio y un estándar legal o razonable de cumplimiento de la función pública. En la práctica, existe una gran proximidad entre estos enfoques, pues ambos atienden al comportamiento que la víctima tiene legítimamente derecho a esperar. La falta de servicio denota el incumplimiento de un deber de servicio, incumplimiento que puede consistir en que no se preste un servicio que la Administración tenía el deber de prestar, que sea prestado tardíamente o que sea prestado en una forma defectuosa de conformidad con el estándar de servicio que el público tiene derecho a esperar. El deber de servicio resulta de la ley, y al analizar la ley que organiza un servicio o establece sus competencias y tareas, es necesario distinguir la función pública, que establece la competencia del órgano administrativo o municipal para actuar, y el deber concreto de actuación, que puede ser hecho valer ante un tribunal. Los hechos que pueden dar lugar a la responsabilidad se pueden ordenar en dos



Foja: 1

grupos: puede ocurrir que el servicio no haya sido prestado a pesar de que el órgano respectivo tenía el deber jurídico de prestarlo, o bien, que se haya incurrido en una falta con ocasión de la prestación del servicio, porque no se ha observado el estándar de servicio exigible, sea porque ha sido prestado tardía o imperfectamente. En suma, el deber de prestar un servicio surge de la interpretación de la norma legal que establece la función pública respectiva. Como en la responsabilidad por culpa, es tarea judicial la determinación del estándar o patrón de conducta que debe observar la Administración Pública y Municipal, a menos que la propia ley defina ciertas situaciones que per se den lugar a la responsabilidad, esto es, una falta de servicio infraccional (Enrique Barros Bourie, “Tratado de Responsabilidad Extracontractual”, Editorial Jurídica, año 2010, página 506 y siguientes).

Así, de conformidad con lo expuesto precedentemente, en relación con lo estatuido en el inciso final del artículo 1° de la Constitución Política de la República, cuya operatividad o aplicación es directa para el Tribunal, es deber del Estado, entre otras cosas, “dar protección a la población” y “asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”, y, a su vez, el inciso segundo del artículo 5° de dicho Código Político consagra que “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”, siendo tales derechos, entre otros, y en lo pertinente para la resolución del caso sub lite, el derecho a la integridad física y psíquica, como también el derecho a la libertad personal y la seguridad individual, establecidos, respectivamente, en los números 1° y 7° del artículo 19 de la Carta Político, derechos esenciales a la condición de ser humano que han sido vulnerados en la especie respecto de la



Foja: 1

víctima directa del hecho ilícito que alegan sus familiares, en conformidad a lo establecido en los fundamentos tercero, séptimo y duodécimo; frente a lo cual, tanto respecto de la víctima directa como también respecto de las víctimas por repercusión, la propia Constitución Política contempla en el inciso 2° de su artículo 38, una acción cuyo titular es “Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades”, quien “podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño”, lo que posteriormente fue recogido en el artículo 4 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, al establecer que “El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”.

En consecuencia, de conformidad con lo concluido precedentemente, en relación con lo dispuesto en el motivo anterior, se tendrá por establecida la concurrencia del requisito en mención, esto es, en definitiva, la falta de servicio cometida por el Estado de Chile en contra de la víctima directa, don ISIDORO SEGUNDO CASTRO VILLANUEVA, ya individualizado, constituida por la violación a los derechos esenciales de los cuales aquél es titular en razón de su condición de persona humana, singularizados en el párrafo anterior, lo cual ciertamente incide en el daño sufrido por la víctima por repercusión que acciona en estos autos.

**DECIMOCUARTO:** Que, en cuanto al tercer requisito de procedencia de la responsabilidad perseguida, señalado en el numeral undécimo, esto es, que la acción ilícita del Estado cause un daño o lesión en los derechos de un administrado, a partir del tenor de la demanda, el perjuicio cobrado corresponde a un daño moral propio de doña ALBINA PRUDENCIA RODRÍGUEZ AVERANGA, cédula de



Foja: 1

identidad 6.399.808-7, en calidad de víctima por repercusión, proveniente del ilícito asentado precedentemente, según lo establecido en los motivos duodécimo y decimotercero, cometido contra la víctima directa.

Al respecto, el daño moral es el que afecta los atributos o facultades morales o espirituales de la persona, noción que la mayoría de la doctrina reconoce como la forma de entender la indemnización del daño moral en Chile (RDJ, T. 39, sec. 1ª, p. 203, citado en Barrientos Zamorano, Marcelo, 2008, "Del daño moral al daño extrapatrimonial: la superación del pretium doloris. Revista chilena de derecho, v.35 n.1, pp. 85-106).

En este sentido, ha quedado acreditado en el motivo séptimo, que doña ALBINA PRUDENCIA RODRÍGUEZ AVERANGA, contrajo matrimonio civil con don ISIDORO SEGUNDO CASTRO VILLANUEVA, con fecha 15 de noviembre de 1974, matrimonio que se mantuvo vigente hasta el día de la desaparición forzada de este último, ocurrida el 31 de mayo de 1977.

Por su parte, también ha quedado acreditado en el numeral 3º del mismo motivo, el contenido del daño moral sufrido por la víctima por repercusión, doña ALBINA PRUDENCIA RODRÍGUEZ AVERANGA, constatado tras evaluación profesional psicológica realizada a través del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS), del Servicio de Salud de Arica; daño moral que deriva precisamente de la desaparición forzosa de su cónyuge, y cuyo contenido particular es el descrito en el referido numeral 3º del motivo séptimo, al cual el tribunal se remite por economía procesal.

En consecuencia, por los antecedentes señalados, el tribunal estima cumplido el requisito en análisis, relativo al daño moral o extrapatrimonial de la actora, en calidad de víctima por repercusión.



Foja: 1

**DECIMOQUINTO:** Que, en cuanto a la concurrencia en la especie del cuarto de los requisitos señalados en el motivo undécimo, esto es, que entre la acción ilícita contra la víctima directa, y el daño moral producido en la víctima directa y en las víctimas por repercusión, exista una relación de causa y efecto, también se tendrá por cumplido, toda vez que, a partir de lo consignado en los fundamentos duodécimo al precedente, se colige que el perjuicio establecido en el motivo anterior, sufrido por la demandante en su calidad de víctima por repercusión, fue directamente causado por la actividad desplegada por el Estado de Chile a través de sus agentes, en contra de la víctima directa.

**DECIMOSEXTO:** Que, en cuanto al quinto y último de los requisitos indicados en el fundamento undécimo, esto es, que el daño no se encuentre indemnizado, también se tendrá por cumplido, en atención a lo razonado en el basamento noveno.

**DECIMOSÉPTIMO:** Que, de conformidad con lo señalado en los motivos duodécimo al precedente, el tribunal estima que concurren en este caso los requisitos de procedencia de la indemnización por daño moral reclamada, por lo cual corresponde ahora abordar la determinación del monto de la misma, conforme a lo pedido en el libelo de demanda.

Al respecto, se tiene presente que, además de las dificultades de prueba del daño moral, los tribunales se enfrentan a la dificultad de traducir lo que es un concepto intangible en una realidad monetaria (Hernán Corral Talciani, “Lecciones de responsabilidad civil extracontractual”, Editorial Jurídica, año 2011, página 167).

A fin de determinar el monto de la indemnización, y conforme al mérito de las pruebas incorporadas, como también a lo establecido en el apartado séptimo y en los apartados duodécimo al decimoquinto, en relación con lo dispuesto en el artículo 426 del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 1712 inciso final del Código Civil,



Foja: 1

se observa que, a raíz del delito de lesa humanidad cometido contra la víctima directa, su cónyuge -víctima por repercusión- se vio privada de la posibilidad de desarrollar el ámbito de su vida correspondiente a su vínculo matrimonial, presentando secuelas psicológicas hasta la actualidad, debidamente acreditadas.

Por otro lado, sin perjuicio de lo decidido en el fundamento noveno, el tribunal estima que si bien es efectivo que el Estado, a través de las leyes que se mencionan en dicho considerando, ha realizado actos de mitigación del daño causado, con todo, dichos actos no constituyen una indemnización integral del mismo, aunque sí inciden en la evaluación del resarcimiento pedido en este juicio.

En consecuencia, por todos los motivos ya expresados en el presente considerando, se regula prudencialmente la indemnización solicitada, en la suma de \$15.000.000 para la víctima pro repercusión que acciona en estos autos.

**DECIMOCTAVO:** Que, en cuanto a solicitud de intereses, y considerando que éstos, en la forma en que han sido pedidos, constituyen una indemnización de perjuicios por la mora, conforme a lo dispuesto en el artículo 1559 del Código Civil, se desestimaré esta petición, por cuanto la demandada no ha incurrido en mora en esta etapa procesal.

**DECIMONOVENO:** Que, en cuanto al reajuste solicitado, la demandante no indica la unidad o medida de actualización de capital, no pudiendo el tribunal completar su omisión ni interpretar su solicitud, por no formar ello parte de la función jurisdiccional y vulnerar la obligación de imparcialidad que pesa sobre el tribunal, motivos por los cuales se desestimaré esta petición.

**VIGÉSIMO:** Que, en cuanto a las alegaciones de la demandada referidas a la regulación de la indemnización por daño moral, corresponderá acogerlas parcialmente, en razón de lo dispuesto en lo





Foja: 1

pertinente del motivo decimoséptimo, solo en lo relativo a tener presente, para la evaluación de la indemnización, las denominadas leyes reparatorias –las cuales no establecen una indemnización en sentido legal-.

**VIGESIMO PRIMERO:** Que, en cuanto a las alegaciones de la demandada sobre la improcedencia de reajustes e intereses en la forma que indica, corresponderá acogerlas, en razón de lo dispuesto en los motivos decimoctavo y decimonoveno.

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** Que en cuanto a la petición de la demandada relativa a la fijación de la indemnización en los términos señalados en el petitorio de su contestación, se accederá a ello en virtud de lo dispuesto en el motivo decimoséptimo, debiendo estarse a la suma dispuesta en lo resolutivo.

**VIGÉSIMO TERCERO:** Que las demás probanzas rendidas en autos, en nada alteran los fundamentos y las conclusiones de esta sentencia.

**VIGÉSIMO CUARTO:** Que se rechazará la petición de costas de la demandante, según lo previsto en el artículo 144 del Código del ramo, dado que su contraparte no ha sido totalmente vencida, en virtud de lo dispuesto en los motivos vigésimo, vigésimo primero y vigésimo segundo.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 4, 5, 6, 7, 19 y 38 inciso 2° de la Constitución Política; los instrumentos internacionales citados en este fallo; el Título XXXV y los artículos 2332, 2492, 2497, 2515 y 2514, todos del Código Civil; las Leyes N° 19.123 y N° 19.980; y los artículos 160, 170, 253 y siguientes, 262 y siguientes, 309 y siguientes, 318 y siguientes, 327 y siguientes, 341 y siguientes, 432, 433 y 748, todos del Código de Procedimiento Civil; **se resuelve:**



Foja: 1

A) Que se desestima la excepción de reparación integral opuesta por la demandada, conforme a lo establecido en el fundamento noveno.

B) Que se desestima la excepción de prescripción extintiva opuesta por la demandada, en virtud de lo decidido en el basamento décimo.

C) Que se acoge parcialmente la acción indemnizatoria entablada en autos, en conformidad con lo dispuesto en los fundamentos duodécimo al decimonoveno, inclusive, y, en consecuencia, se declara que se condena al demandado, a pagar la suma de \$15.000.000 a la demandante, a título de indemnización por daño moral, en calidad de víctima por repercusión de la desaparición forzada de su cónyuge, todos ya individualizados en autos; y se desestima el libelo en todo lo demás.

D) Que se acoge parcialmente la defensa del demandado relativa a la regulación de la indemnización cobrada, en virtud de lo dispuesto en el numeral vigésimo.

E) Que se acoge la defensa de la demandada relativa al reajuste e intereses cobrados, conforme a lo establecido en el motivo vigésimo primero.

F) Que se acoge la solicitud concreta de la demandada, relativa a la fijación de la indemnización en los términos que señala en el petitorio de su contestación, conforme a lo dispuesto en el motivo vigésimo segundo.

G) Que no se condena en costas a la demandada, en virtud de lo dispuesto en el apartado vigésimo cuarto.

Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente archívense estos antecedentes.

**ROL C-15.225-2022.**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NNXQXKYSXCQ

C-15225-2022

Foja: 1

**Dictada por Doña Susana Rodríguez Muñoz, Jueza.**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintitrés de Diciembre de dos mil veintitrés**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NNXQXKYSXCQ